

PP y PSOE engrasan la maquinaria de los acuerdos

■ A. S. A.

Desde que **Mariano Rajoy** llegó a La Moncloa, ha echado mano, de manera casi compulsiva, de los decretos ley convalidados prácticamente en solitario por el Congreso gracias a la mayoría absoluta del PP. Sin embargo este año, el presidente del Gobierno está decidido a buscar acuerdos especialmente con el principal partido de la oposición, el PSOE, y en temas de gran trascendencia política.

Hay algunos asuntos en los que el terreno parece abonado porque el primer gran pacto de la legislatura popular está a punto de concretarse y será el de la Administración local. Si no hay contratiempos, se cerrará antes de que finalice el mes.

El Gobierno lo da por sentado y también **Alfredo Pérez Rubalcaba** y **Javier Arenas** además de los responsables de política municipal **Gaspar Zarrías** y **Manuel Cobo** que llevan tiempo negociando después de que a finales del año pasado el PP congregara a sus alcaldes para hablarles de la oportunidad de llegar a un consenso.

Entre los aspectos más destacados del texto que se negocia con el PSOE y que se incluirá dentro de la Ley de Bases de Régimen Local destaca la supresión de las cerca de 1.000 mancomunidades de municipios. Otro de los aspectos de los que más se ha hablado es

el de la limitación de los sueldos de los alcaldes en las grandes ciudades al salario que perciben ahora los secretarios de Estado. Pero el Gobierno afronta su principal reto con la reforma de la Administración General y poder así presentar un acuerdo con el principal partido de la oposición.

Pero antes, en 2012, hubo intensos contactos para pactar, entre otros asuntos, la reforma del sistema financiero que concluyó sin acuerdo entre los dos grandes partidos. Hubo también sesiones maratónicas en el tema de los desahucios y todo quedó en un decreto aprobado en solitario y una enmienda a la totalidad presentada por socialistas a la espera de ser tramitada como proyecto de ley en el Congreso. Hubo también conversaciones de perfil bajo entre el ministro **Alberto Ruiz-Gallardón** y el líder de la oposición **Pérez Rubalcaba** para pactar los cambios del Poder Judicial que está pendiente de la tramitación parlamentaria. Todos los intentos de acuerdo han sido inútiles hasta el momento, excepto en la búsqueda de argumentos comunes sobre política europea. En este escenario se han abierto hace algo más de un mes conversaciones sobre la reforma de la Administración. El Ejecutivo sabe que un pacto resulta imprescindible para rematar con éxito la iniciativa por lo que se ha creado una comisión que tratará

en profundidad la manera de abordar los cambios. El Gobierno anunciaba hace escasos días que la Comisión de Reforma para las Administraciones Públicas crearía un buzón para conocer de primera mano los problemas, las propuestas y las vías de reforma en dos ámbitos de actuación: las duplicidades y la simplificación administrativa".

"Hay algunos asuntos en los que el terreno parece abonado porque el primer gran pacto de la legislatura popular está a punto de concretarse y será el de la Administración local. Si no hay contratiempos, se cerrará antes de que finalice el mes"

Ambos partidos empezarán a negociar también la reforma de las pensiones con la intención de que se mantenga un alto grado de consenso. El secretario de Organización del PSOE, **Oscar López**, ha declarado que sin esa condición, no será posible: "El PSOE no será parte activa en ninguna reforma de pensiones que no cuente con el mismo consenso que tiene el sistema actual. Los socialistas van a exigir que se dé ese consenso y

si no se da, el PSOE no estará". El vicesecretario general de Organización del PP, **Carlos Floriano**, se ha mostrado convencido de que se alcanzará "un mínimo de acuerdos" con la oposición y los dos sindicatos y conseguir, por ejemplo, que la semejanza entre la edad legal de jubilación y la efectiva.

Pero no todo es crisis económica a la hora de buscar acuerdos. La Ley de Transparencia se tratará en el Congreso este mismo mes tras sufrir sucesivos retrasos. Y aunque el pensamiento del Gobierno y del resto de los grupos son diferentes, PP y PSOE han abierto contactos para elaborar una ley de la que disponen los países democráticos más avanzados y que es una asignatura pendiente en España. Populares y socialistas se han puesto de acuerdo en las formas y han pedido a la Mesa del Congreso que habilite la Comisión Constitucional durante el mes de enero para que comparezcan expertos y ofrezcan sus aportaciones.

El proyecto que aprobó el Gobierno en el mes de agosto excluye a instituciones como la Casa del Rey. Ninguno se atreve a mostrar excesivo optimismo, pero los dos grandes partidos han designado a personas de la máxima confianza para intentar un acuerdo en esta ley que consideran debería ser ultimada

con el máximo consenso. Por el PP estarán el secretario general del Grupo Parlamentario, **José Antonio Bermúdez de Castro**, experto en consensos de especial relevancia, el vicesecretario de Estudios del PP, **Esteban González Pons**, y el portavoz del grupo en la Comisión Constitucional, **Pedro Gómez de la Serna**. Por el PSOE, **José Enrique Serrano**, jefe de gabinete de los dos presidentes de Gobierno socialistas, **Meritxell Batet**, portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Socialista, y **Ramón Jáuregui**, portavoz en la Comisión Constitucional. Pero Mariano Rajoy quiere además buscar una postura común con el principal partido de la oposición sobre Cataluña frente al envite independentista. El PSOE señala que aún no han tratado del tema aunque piensan, al igual que el Gobierno que la consulta, en claves de CiU y ERC, no puede celebrarse. Hay, como se ve, sitio para el pacto aunque su pertinencia se valora con pies de plomo, ante la posibilidad de que los nacionalismos pudieran interpretarlo como una provocación.

Tanto Rajoy como Rubalcaba dicen que sus charlas telefónicas son habituales aunque su último encuentro en la Moncloa fue en mayo de 2012, y se muestran convencidos de que llegarán los acuerdos sobre las cuestiones más importantes.

Crónica mundana

Obama sorteando el abismo pero toca techo en la deuda

■ Manuel Espín

Obama va a iniciar su segundo mandato con una "patata caliente" arrastrada desde los años en los que **Bush** decidió bajar los impuestos a los más ricos: un déficit fiscal que obliga a revisar toda la política impositiva y presupuestaria y una ingente deuda pública cuyo techo tocará en dos meses y obligará a austeridad y recortes. El asunto no es nuevo, pero su desenlace? pactado de momento, con votaciones que dependen de un solo representante, recuerda demasiado a una comedia de Frank Capra pero al revés, con idealistas que pretenden "liberar" a los ciudadanos de la presión de los impuestos, a cambio de recortar o eliminar en los programas sociales que favorecen a los más desprotegidos. En 2001 y 2003 Bush había sacado adelante una rebaja de los impuestos que alcanzaba de lleno a los más ricos. Esos recortes, según el senador demócrata ahora muy crítico con la "tibieza" de Obama, **Tom Harkin**, "destrozaron todo", con un "agujero fiscal" creciente, agravado año tras año. La administración demócrata se veía obligada a revisar los impuestos para evitar el llamado "abismo fiscal", es decir la entrada del gobierno federal en bancarrota. Un riesgo que según el FMI "arrastraría al precipicio" a la economía mundial.

Dentro de la "tormenta de ideas" en la que se ha convertido este proceso, en las últimas semanas se pusieron de manera evidente distintas posiciones puramente ideológicas sobre el papel del estado y la administración. Obama pretendía inicialmente dejar de aplicar la "regla Bush" que favorece a los más ricos, con una subida de la presión fiscal para el 4 % de la población, es decir, aquellos que ganan a partir de los 250.000 dólares al año (190.000 euros). Los republicanos pusieron el grito en el cielo frente a ese cambio, absolutamente necesario para evitar de manera urgente un estruendoso déficit fiscal de unos 16 billones de dólares, equivalentes a 12,5 billones de euros. Obama tenía distintas alternativas: subir impuestos a los más ricos o recortar gastos. Los de Defensa quedaban al margen, únicos que los republicanos no quieren recortar. Los sociales, habrían de afectar especialmente al programa Medicare. En un país donde no existe seguridad social pública, Medicare que cubre parcialmente a través de un sistema de copago a 50 millones de personas ancianas, con escasos recursos o con determinadas enfermedades, creada en los tiempos del presidente **Johnson**, por el crecimiento de su gasto dado el envejecimiento de la población, estaba en el ojo de mira. Un recorte más drástico en otras

partidas del presupuesto, no solo hubiera significado la contradicción de la política Obama frente a la europea de **Merkel**, sino que enfriaría la economía en un momento en el que el desempleo alcanza a más del 9 % de los trabajadores. Los republicanos defendían "blindar" a los más ricos continuando con las ventajas de los tiempos de Bush, recortando en cambio en programas sociales. Obama se ha visto obligado a escenificar una salida

"El Congreso tendrá que aprobar el tope del déficit de deuda en dos meses, que los 'ultras' republicanos no aceptan y del que recela la izquierda de Obama"

a la palestra verbalmente radical en la que dice que "no es justo recortar a ancianos o a estudiantes, sin pedir el mismo sacrificio a los millonarios". El Partido Republicano se ve presionado por un "lobby" influyente, nucleado por el **Tea Party**, en clave de un neoliberalismo ultra fuertemente ideologizado, en el que se desconfía de todo lo público; en el que los más exaltados son partidarios de la eliminación de la escuela pública y de poner al estado al servicio de

los poderes privados, reduciendo las ayudas sociales a lo simbólico. Una desconfianza hacia la acción del estado, reducido a un débil árbitro que permita el juego de lo privado. Dentro de una desregulación que tuvo mucho que con las causas de la crisis de 2007 que obligaron de manera harto paradójica a Bush a realizar la mayor inversión con dinero de los ciudadanos de toda la historia norteamericana para salvar al sistema bancario. En las últimas horas de este episodio casi extraído del argumento de una película de los años 40, demócratas y republicanos han alcanzado un acuerdo de mínimos, que supone por vez primera en 20 años un aumento de impuestos a los más ricos, es decir aquellos que ganan al año más de 400.000 dólares, mientras se aplaza a 2 meses la decisión sobre el techo del gasto que habrá de votar el Congreso, y para la que todavía no hay acuerdo. Los republicanos aceptan la subida de impuestos a un sector reducido de la población más rica, a cambio de revisar el gasto en otras partidas. Obama tratará de recortar 110.000 millones, que salen tanto de Defensa como de gasto social. Los republicanos quieren recortar en todo, incluido el gasto social, pero se oponen de manera radical a la reducción en gastos militares.

El "pacto" "in extremis" no ha sentado bien en el ala más

progresista del Partido Demócrata que lo considera "una concesión en la que Obama se ha plegado a los republicanos". Presionado por la urgencia del agujero fiscal, el presidente ha tenido que alcanzar un pacto de mínimos, por ahora provisional, pero incompleto. Tendrá que hacer "milagros" para paliar el déficit sin tener que subir impuestos de nuevo a los ricos, a lo que se opone de manera radical el Partido Republicano, y sin eliminar partidas sociales. El debate, es una versión más del que afecta a estados europeos donde las políticas fiscales están en el ojo del huracán, como es el caso de Francia, donde se acaba de venir abajo uno de los pocos referentes de izquierda de un **Hollande** muy criticado por sus bases, como era la imposición por dos ejercicios de un impuesto a quienes ganan al año cerca del millón de euros, a los que se gravaría a un tipo del 75 %. Y no es ajeno a los propios partidos de derechas o de centro-derecha de la UE que se mueven entre un liberalismo con ciertos toques de estado de bienestar, y la fortísima presión de los "ultras" neoliberales partidarios de reducir lo público a la mínima expresión. Un debate también presente en la CDU alemana, como en el tablero electoral italiano de los dos ejes de la derecha (**Berlusconi** y **Monti**), e incluso dentro del propio partido de Rajoy.